

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SALA DE ORALIDAD

Auto Interlocutorio

RADICADO: 76001-23-33-000-2022-00647-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CRISTIAN MARCEL BURBANO VELASQUEZ Y OTROS
jmurielandrade@gmail.com
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
notificacionesjudiciales@urt.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI
(procjudadm19@procuraduria.gov.co)

TEMA. IMPRIME TRÁMITE DE SENTENCIA ANTICIPADA

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintidós (2022)

ANTECEDENTES

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, el señor Cristian Marcel Burbano Velásquez interpuso demanda contra La Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y La Unidad Administrativa especial de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de obtener la nulidad de las siguientes actuaciones:

- Resolución nro RV 01519 del 23 de septiembre de 2016¹, «*Por la cual se decide no Inscribir vanas solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente*».
- Resolución nro RV 01973 de 24 de noviembre de 2016², «*Por la cual se decide sobre unos recursos de reposición presentados contra la Resolución nro. RV 01519 de 23 de septiembre de 2016*».

¹ Folio12-68 ArchivoDenominado «01Expediente.pdf» se encuentra colgado en la plataforma Samai.

² Folio69-90 ArchivoDenominado 01Expediente.pdf se encuentra colgado en la plataforma Samai.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero, y/o quien haga sus veces, la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a los demandantes, así como iniciar las acciones concernientes para conseguir la restitución de los predios despojados. Solicitó, además, que se condene en costas a la demandada y que se ordene a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 y siguientes del CPACA.

3. Por Auto nro. 1255 del 23 de noviembre de 2017³, el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali admitió la demanda únicamente a favor del señor Cristhian Marcel Burbano Velasquez, respecto a los demás demandantes fue rechazada, y se aceptó como demandados al Ministerio de Agricultura y la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas.

4. La demanda se notificó en debida forma a las entidades demandadas⁴.

5. La Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas se opuso a las pretensiones y formuló excepciones de mérito y la excepción previa de falta de competencia⁵.

6. El Ministerio de Agricultura se opuso a todas las pretensiones y formuló excepciones de mérito y la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.⁶

7. En la audiencia inicial del 15 de junio de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del CPACA, estableció que carecía de competencia para asumir el conocimiento del asunto en razón de la cuantía, en virtud a lo señalado en el artículo 157 del CPACA. Explicó que, al tratarse de un asunto cuantificable cuya cuantía se determinó por el avalúo catastral de los predios objetos de litigio —que ascienden a \$3.809.970.000—, superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que, en su criterio, el conocimiento del asunto le correspondía al superior, y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Valle.

CONSIDERACIONES

1. De la jurisdicción

8. Según el artículo 152 del CPACA y conforme a lo expuesto por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali, esta corporación sí es competente para conocer del asunto. En efecto, según el artículo anteriormente citado, los tribunales administrativos son competentes, en primera instancia, para conocer de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvierta actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y como la cuantía del asunto supera esa cuantía, el Tribunal sí es competente.

³Folio 159 Archivo Denominado « 01Expendiente.pdf » que se encuentra colgado en la plataforma Samai.

⁴Folio 142 Archivo Denominado «01Expediente.pdf» que se encuentra colgado en la plataforma Samai.

⁵Folio 248 Archivo Denominado «01Expediente.pdf» que se encuentra colgado en la plataforma Samai.

⁶ Folio 233 Archivo Denominado «Expediente.pdf» que se encuentra colgado en la plataforma Samai.

9. Según el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados de actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucrados las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. En el presente asunto, se pretende la nulidad de actos administrativos expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero. Así, por ser una controversia originada en actos administrativos en la que está involucrada una entidad pública, esta es la Jurisdicción competente.

2. Decisión sobre excepciones previas

10. Según la entidad demandada, Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca carece de competencia para conocer el asunto en primera instancia, por cuanto se discute es la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por lo que, al no reclamarse el resarcimiento de un derecho económico, el asunto carece de cuantía y el competente es el Consejo de Estado, según el artículo 149 numeral 2 del CPACA⁷.

11. Al analizar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el Despacho estima que sí es competente para conocer el asunto, pues sí tiene pretensiones cuantificables, en los términos del artículo 157 del CPACA, pues se pretende la nulidad de los actos administrativos mediante los que se decidió no iniciar el estudio formal de las solicitudes de inscripción de unos bienes inmuebles de propiedad de los demandantes en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.

12. El numeral 3º del artículo 152 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, determina la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

2.- De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvierta actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

13. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cali solicitó de oficio el avalúo catastral al Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito de Santiago de Cali, con el fin

⁷ Folio 248 Archivo Denominado «01Expediente.pdf» que está colgado en la plataforma Samai.

de obtener el valor de los predios⁸ objeto de la litis, cuya suma es de \$3,809,970,000, lo que demuestra que el asunto sí tiene cuantía y excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo que el despacho es competente para conocer del asunto.

14. En conclusión, no prospera la excepción de falta de competencia, pues el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí es competente en primera instancia para conocer del asunto, pues, en los términos del numeral 2° del artículo 152 de la Ley 2080 de 2021, el acto administrativo demandado, Resolución nro RV 01519 de 23 de septiembre de 2016, crea una situación jurídica en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, que tienen una cuantificación en el mercado, que se acredita con el avalúo catastral, lo que pone de manifiesto el carácter económico del presente asunto, es decir, que involucra cuantía.

15. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues, aunque La Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas es una entidad adscrita al Ministerio, la Unidad tiene autonomía propia e independiente para tramitar asuntos administrativos, por lo que el Ministerio nada tiene que ver con las resoluciones demandadas en el presente asunto.

16. Sin embargo, la excepción propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de falta de legitimación en la causa por pasiva, no puede resolverse en este momento, pues al no estar enlistada en el artículo 100 del CGP, este no es el momento procesal para resolverla, y se hará en la sentencia.

3. Sentencia anticipada

17. El artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, establece, en su numeral 1°, que el operador judicial tiene la posibilidad de dictar sentencia anticipada, antes de la audiencia inicial, si: a) se trata de un asunto de puro derecho, b) no es necesario practicar pruebas, c) se solicita tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación o d) cuando las pruebas pedidas sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

18. Esa norma establece que la autoridad judicial se pronunciará sobre las pruebas, cuando haya lugar, aplicará lo dispuesto en el artículo 173 del CGP⁹ y fijará el litigio. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 del CPACA, y la sentencia se expedirá por escrito.

19. Expuesto lo anterior, el Despacho advierte que se cumplen los presupuestos establecidos en los literales b) y c) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA para

⁸ Archivo denominado «33Respuestacatastromunicipal21022022.pdf» que está colgado en la plataforma Samai.

⁹ ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción.

dictar sentencia anticipada, pues no es necesario practicar pruebas, así, sólo quedarán las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación, y los antecedentes administrativos (a los que se referirá el Despacho en el acápite siguiente).

4. Decreto de pruebas

20. El Despacho tendrá como pruebas los documentos aportados en la demanda y la contestación de la demanda del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural¹⁰, la subsanación de la demanda y los allegados en la contestación de demanda de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas¹¹.

21. Por ende, a la luz del actual objeto del litigio, no quedarían pruebas pendientes por practicar.

5. Fijación del litigio

22. De conformidad con el inciso 7° del artículo 182A del CPACA¹², se fijará el litigio en los siguientes términos:

23. La Sala debe determinar si se deben anular los actos administrativos demandados, que negaron al demandante la inscripción de su predio al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, porque el presunto despojo de los predios que se pretendían inscribir no guardaban una relación cercana y suficiente con el conflicto armado sino con la delincuencia común, como dijo la Unidad, toda vez que, a juicio del demandante: **(i)** los predios fueron adquiridos de manera legal, pacífica y de buena fe; **(ii)** funcionarios estatales estaban a la orden de una organización ilegal que, con decisiones como la de cancelar matrículas inmobiliarias la beneficiaban para despojar predios; **(iii)** se desconoce la calidad de víctima del conflicto armado del demandante, porque no cumple con los requisitos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, a pesar de haber sufrido violencia y el despojo de sus predios, y **(iv)** no es cierto que la pérdida de propiedad de los predios sea la supuesta declaratoria de nulidad de las resoluciones que dan vida a los títulos que adquirió el demandante, porque la verdadera razón son los actos violentos de que fueron víctimas los propietarios por parte de un grupo paramilitar, que, una vez consigue la ocupación de los predios por la fuerza, hace uso de los nexos que tiene con los agentes del Estado para legalizar las tierras. La Sala también debe determinar la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

6. Alegatos de conclusión

24. El penúltimo inciso del numeral 1° del artículo 182A del CPACA prescribe que, una vez el ponente se pronunció sobre las pruebas aportadas y fije el litigio, ordenará correr traslado de los alegatos de conclusión, en los términos del inciso final del artículo 181 del CPACA y a continuación proferirá sentencia por escrito.

¹⁰Folio140Archivo Denominado «01Expediente.pdf» que está colgado en la plataforma Samai.

¹¹Archivo denominado «02Subsanaciondemandamediomagnetico19102017.pdf» «01Expediente.pdf.» que está colgado en la plataforma Samai.

¹²Artículo182Ainciso7Las constancias que el Juez o el magistrado ponente, o la Sala, Sección o Subsección ordenen registrar y las que soliciten las partes sobre lo acontecido en la audiencia.

25. Para el efecto, se correrá traslado para que las partes aleguen conclusión por escrito, por el término común de 10 días. Dentro del mismo término, el Ministerio Público podrá rendir concepto, si a bien lo tiene. Vencido el plazo para presentar alegatos, el proceso ingresará al Despacho para dictar sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de competencia propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas.

SEGUNDO: INCORPORAR al proceso las pruebas documentales aportadas por las partes con los escritos de demanda y su subsanación, así como los allegados con las contestaciones de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: FIJAR EL LITIGIO en los términos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: CORRER TRASLADO a las partes, por el término común de 10 días, para alegar de conclusión por escrito. Dentro del término, el Ministerio Público podrá rendir concepto si a bien lo tiene. Vencido el plazo para presentar alegatos, el proceso ingresará para dictar sentencia.

QUINTO: Por Secretaría, **NOTIFICAR** la presente providencia por estados electrónicos y mediante mensaje de datos a los buzones de correo electrónico administrados por las partes y al Ministerio Público.

SEXTO: Todos los memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso deberán ser allegados a través de la ventanilla virtual en la plataforma Samai (<https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>) con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente por SAMAI)
PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada